

Llegó la hora de la soberanía alimentaria

Suplemento del Cuaderno núm. 163 de CiJ - (n. 199) - Septiembre, 2009
R. de Llúria, 13, 08010 Barcelona - tel. 93 317 23 38, fax 93 317 10 94
info@fespinal.com - www.fespinal.com

¿Te has preguntado alguna vez por qué una manzana cuesta casi lo mismo venga de Sudáfrica, California o España? ¿Por qué podemos encontrar los mismos alimentos en el supermercado durante todo el año? O ¿por qué importamos de tan lejos productos que nuestros agricultores cosechan a escasos kilómetros de nuestras casas?

«Con la comida no se juega», repetían nuestras abuelas. Pero hoy la alimentación se ha convertido en un valor más de mercado y con él se “juega” en todas las bolsas del mundo, independientemente de las repercusiones que esto tenga para los seres humanos.

Los españoles gastamos el 18% de nuestros sueldos en alimentación, y nos rasamos los bolsillos cuando los alimentos suben de precio, como ha ocurrido en la crisis alimentaria de 2008. Pero en la mayoría de los países en desarrollo, las familias gastan entre el 60 y el 80% de sus ingresos en alimentación: ¿cómo pueden reaccionar ante las subidas del mercado?

1. Alimentos: producción y consumo

¿Qué pasa aquí en el Norte?

Desde hace muchos años, los agricultores de España y Europa no pueden producir si no es gracias a los subsidios que reciben por medio de la PAC. Algunos años, incluso se llegaba a pagar a los agricultores para que no produjeran o para destruir sus cosechas, debido a las exigencias del mercado y a la competencia de los productos extranjeros. De cada euro que la Unión Europea gasta, cincuenta céntimos se destinan a pagar a sus agricultores, pero no a todos: el 4% de los empresarios agrícolas recibe el 40% de las ayudas. Esta tendencia al incremento de la productividad y a las grandes explotaciones, junto con legislaciones enfocadas a este tipo de agricultura, crean grandes dificultades a los pequeños productores para hacer rentables sus producciones y para cumplir con las legislaciones vigentes.

Además, cuando un agricultor español decide vender su producto, se encuentra con

un nuevo problema. En España, unas pocas compañías controlan todo el sistema intermediario de distribución de alimentos. El poder que estas compañías ejercen sobre todos los agricultores es enorme, al imponer los precios finales de compra y los plazos de pago. ¿No sería ideal poder ir al supermercado y elegir el precio y el plazo de pago de nuestra compra? Pues ésta es realmente la imposición que sufren nuestros agricultores.

Una vez en el súper, nuestros alimentos locales han de competir con otros traídos del extranjero, muchas veces más baratos por las condiciones injustas en que se producen y comercializan. Además, el transporte de estos alimentos, y de los insumos ligados a la agricultura, representa un 5% de la energía consumida cada año, en el mundo.

Un producto no es mejor por estar hecho cerca. Los modelos de producción de alimentos que usamos en los países industrializados son altamente eficientes en cuanto a cantidad, pero altamente ineficientes en cuanto a consumo energético. En Estados Unidos, por ejemplo, por cada caloría de alimento producido en una granja intensiva de vacas, se consumen 12 calorías; o por cada caloría de alimento producido en una granja intensiva de huevos, se emplean 4 calorías.

¿Y qué decir de los consumidores? Pues que cada vez vemos más reducidas nuestras opciones. En España, el 81% de la población compra sus alimentos en grandes centros de distribución alimentaria. Cinco empresas y dos centrales de compras controlan el 75% de la distribución alimentaria y el 60% de todo el beneficio que genera la cadena agroalimentaria. Esta concentración de la distribución de alimentos crea un efecto embudo, con muchos productores y muchos consumidores en ambos lados de la cadena y muy pocos distribuidores lo cual

les da un gran poder de decisión sobre precios, plazos, calidades y disponibilidad de los productos que consumimos todos los ciudadanos.

¿Y qué es lo que pasa allí, en el Sur?

En el resto del mundo, las cosas no van mejor. Las políticas llevadas a cabo por los gobiernos y por instituciones internacionales, en las últimas décadas, no han ayudado casi nada a los productores de los países más empobrecidos. Las políticas de liberalización de mercado, realizadas por el FMI, o de enfoque a la agricultura de exportación, realizadas por el BM, han llevado a los campesinos a la ruina, en muchos países.

Como ejemplo, veamos el caso de Haití. Es el país más empobrecido de toda América y uno de los más desestructurados del mundo. La dieta básica de los haitianos consiste en arroz y carne. En la década de los 60, Haití era capaz de producir prácticamente todo el arroz que se consumía en el país y solo tenía que importar unas 200 toneladas. Después del desembarco de los organismos internacionales, Haití produce cada año menos arroz y más caña de azúcar de exportación. En el período 1997-2002, importó de Estados Unidos 1,3 millones de toneladas de arroz. En 2008, los haitianos se levantaron en violentas revueltas tras la subida de los alimentos, ya que para la mayoría de la población era imposible alimentar a sus familias.

La des-regulación del mercado haitiano, gracias al Tratado de Libre Comercio, es otro de los factores que ha hundido el país. Al igual que en Colombia, Panamá, Chile, Honduras o El Salvador entre muchos otros, los agricultores de estos países tienen que competir, de igual a igual, con los agricultores mecanizados y subsidiados por los gobiernos de los países más ricos. De esta ma-

nera, los gobiernos europeos y norteamericanos juegan con el futuro de estas familias, exigiéndoles políticas que ni ellos mismos cumplen con sus agricultores.

Pero además, cuando estos productos alimentarios consiguen llegar a los mercados internacionales, los especuladores de las bolsas de valores juegan con ellos como si fueran una materia cualquiera y no el sustento de miles y miles de familias en el mundo. El uso de granos alimentarios como moneda de cambio en bolsas, como la de Chicago y Nueva York, se estima que fue responsable del 30% de las alzas de precios en 2008. En ese momento, los granos básicos alcanzaron récords históricos, haciendo inaccesibles estos productos a los más necesitados. Como ejemplo, según la FAO, el precio del arroz, sustento para miles de familias empobrecidas en todo el mundo, subió un 74%.

Con la misma intención de sacar más beneficio a estos granos, la conversión de explotaciones alimentarias en zonas de cultivo para biocombustibles también ayudó al alza del 2008. Miles de hectáreas, antes dedicadas a cultivar alimentos básicos, ahora se utilizan para quemar esos alimentos y dar de comer al miembro «más importante de la familia», como dice Galeano: el vehículo. Hay que tener en cuenta que para llenar el depósito de un coche de bio-etanol (80 litros) se utiliza la misma cantidad de grano que para dar de comer a una persona todo un año, según estudios del Earth Policy Institute. Además las malas prácticas y las malas políticas, asociadas a estos cultivos, han provocado problemas sociales como desplazamientos forzados de población, pérdida de selva o desecación de acuíferos.

El año 2008, en más de 20 países estallaron revueltas con motivo de la subida de precio de los alimentos. Estas revueltas fueron fruto de la desesperación de los más

desposeídos por no poder acceder a un derecho universal: el derecho a la alimentación. Y para que este derecho se cumpla, es evidente que no podemos dejarlo en manos del mercado libre.

2. Hay alternativas: la soberanía alimentaria

Frente a este panorama, las organizaciones campesinas y de productores agrícolas proponen una alternativa: la soberanía alimentaria.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos y de los países a definir las políticas agropecuarias y de producción de alimentos, organizando la producción y el consumo de alimentos de acuerdo con sus necesidades y dando prioridad a la producción y al consumo local. La soberanía alimentaria promueve la devolución, a cada pueblo y nación, del control sobre los alimentos que produce y consume; la recuperación de todas las herramientas jurídicas, técnicas y políticas que necesite para ello, y su aplicación eficaz en ámbitos locales, nacionales o regionales, que es donde debe ser dirigida la producción de alimentos, por considerarse una cuestión de seguridad e independencia nacional.

En consecuencia, la soberanía alimentaria significa priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población; el acceso de los agricultores y de los “sin tierra” a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito; el derecho de los agricultores a producir alimentos, y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce. También significa el derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas; el compromiso con una producción agrícola sostenible; y el reconocimiento de los derechos de las muje-

res campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación. Desde esta perspectiva, se defiende un modelo de intercambio agrícola centrado en los mercados locales, regionales y estatales, redimensionando así el comercio internacional, pues se considera que tanto los precios como la producción deben ser regulados y orientados por las necesidades locales y no por los mecanismos de un mercado libre dominado por las grandes corporaciones, para priorizar así el desarrollo local. Justo lo contrario de lo que pretenden los Tratados de Libre Comercio (TLC).

Por último, en lo que se refiere a las políticas agrarias, se defiende una política de ayudas centrada en los agricultores y no en las industrias del campo, defendiendo una visión de la agricultura como “servicio público” puesto que sólo una agricultura campesina es la garantía de una producción equilibrada de alimentos, atenta a los armonía de los ecosistemas, garantizadora de la sostenibilidad ambiental y capaz de gestionar armoniosamente el territorio rural.

En resumen, son los pueblos quienes han de tomar las decisiones relacionadas con la política alimentaria y deben ser ellos quienes decidan qué y cómo producir, por no estar sometidos a la oscilación del mercado.

3. ¿Qué puedo hacer yo?

Como consumidores, debemos tomar conciencia del gran poder que hay detrás de nuestras compras, algo de lo que no siempre somos conscientes. El consumo no es sólo un medio de supervivencia, sino también una forma de relacionarse y comunicarse con uno mismo y con los demás.

Por ello, es necesario avanzar hacia un consumo alternativo y responsable, basado en tres pilares fundamentales: un consumo acorde a valores éticos, un consumo solidario con los excluidos de la “mano invisible del mercado”, y un consumo ecológico que tenga en cuenta el impacto medioambiental.

Además, a nivel mundial se llevan a cabo múltiples iniciativas en favor de la soberanía alimentaria. En España, campañas específicas como «Supermercados no gracias» o «No te comas el mundo» denuncian algunas de estas cuestiones específicas. En los países del Sur, movimientos como La Vía Campesina o los movimientos anti TLC hacen su labor de lucha, concienciación y apoyo entre sus propios ciudadanos. El apoyo a cualquiera de estas iniciativas pondrá nuestro granito de arena a la consecución de estas metas.

En conclusión, es necesario buscar alternativas. La soberanía alimentaria propone un cambio al modelo agroalimentario hegemónico, propone una nueva vía para hacer de nuestro mundo un mundo más justo, más equitativo y más sostenible para todos y propone una forma de asegurar el derecho a la alimentación a los millones de personas que todavía pasan hambre en el mundo. No es un desafío fácil, pero nos jugamos mucho en ello como para permanecer impasibles ante la situación actual.

Basilio Rodríguez (ingeniero forestal)
y Jesús Sanz (antropólogo)

*Miembros del grupo de consumo
responsable GÜECO*